

**COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
RESOLUCIÓN 58/2024**

Medidas Cautelares No. 907-24

**Ana Carolina Guaita Barreto respecto de Venezuela**

27 de agosto de 2024

Original: español

**I. INTRODUCCIÓN**

1. El 22 de agosto de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia<sup>1</sup> (“la parte solicitante”) instando a la Comisión que requiera al Estado de Venezuela (“el Estado” o “Venezuela”) la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión de Ana Carolina Guaita Barreto (“la propuesta beneficiaria”). Según la solicitud, la propuesta beneficiaria es periodista corresponsal del diario digital “la patilla” en Venezuela y fue detenida el 20 de agosto de 2024 y llevada a la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de la Guaira. El 22 de agosto, ella fue trasladada por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a un lugar desconocido. La parte solicitante califica la situación como “desaparición forzada”.

2. De conformidad con el artículo 25.5 del Reglamento y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión requirió información a las partes el 23 de agosto de 2024. La parte solicitante remitió respuesta el 25 de agosto de 2024. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del Estado, encontrándose vencido el plazo otorgado.

3. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por la parte solicitante, la Comisión considera que la propuesta beneficiaria se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que hasta la fecha se desconoce su paradero. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Ana Carolina Guaita Barreto. En particular, informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención, o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino. La Comisión considera necesario que el Estado precise si la beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habersele imputado delitos. De lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha; b) implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades periodísticas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

**II. RESUMEN DE LOS HECHOS Y ARGUMENTOS**

**A. Información aportada por la parte solicitante**

4. La parte solicitante informó que Ana Carolina Guaita Barreto es periodista corresponsal del diario digital “la patilla” en Venezuela. Según lo indicado, el 20 de agosto de 2024 ella fue privada de su libertad de manera presuntamente arbitraria por supuestos agentes de los cuerpos de seguridad. Se alegó que la privación de libertad ocurrió cuando estaba saliendo de su casa, en el área del estacionamiento de su edificio. En dicho lugar habría sido acorralada por funcionarios que no se identificaron y que se la llevaron en presunta

---

<sup>1</sup> La parte solicitante señaló que los familiares de la propuesta beneficiaria otorgaron su consentimiento para presentar la solicitud de medidas cautelares dado que no se conoce su paradero.

inobservancia de los procedimientos constitucionales y convencionales. La parte solicitante agregó que, por información brindada por familiares de la propuesta beneficiaria, ella fue trasladada a la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de la Guaira, donde la mantuvieron hasta el día 21 de agosto del año 2024 en circunstancias de aislamiento. Se informó que el director de seguridad del Estado de Guaira habría propuesto a la madre de la propuesta beneficiaria liberar a su hija a cambio de que ella se entregara.

5. El 22 de agosto del 2024, en horas de la mañana, la propuesta beneficiaria habría sido trasladada por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a un lugar desconocido. Desde entonces, no se tiene noticias de su paradero o lugar de detención. En ese contexto, la parte solicitante señaló que, hasta la fecha, los padres de la propuesta beneficiaria estarían resguardados en la clandestinidad, por temor de ser detenidos, debido a su condición de dirigentes gremiales y políticos vinculados a la organización sindical “Coalición Sindical” y al Partido de Oposición COPEI. Se alegó que los agentes de seguridad llevan días buscándolos para posiblemente privarlos de su libertad. Debido a ello, las labores de búsqueda han sido conducidas por amigos cercanos de la familia, quienes se habrían acercado a la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado de la Guaira para buscar noticias del paradero de la propuesta beneficiaria. Pese a los esfuerzos, los funcionarios no brindaron ninguna información.

6. El 24 de agosto de 2024, se intentó presentar un recurso de *Habeas Corpus* en modalidad de desaparición forzada ante el Circuito Judicial Penal del Estado de Guaira. Se adjuntó copia de mensaje enviado por el padre de la propuesta beneficiaria, por medio de la plataforma *WhatsApp*, en la cual indica que el tío de la propuesta beneficiaria esperó por más de 3 horas en las afueras de la sede judicial y luego se retiró del lugar, ante la negativa de recibir el recurso a su favor. Como soporte documental adicional, se adjuntaron copias de campañas de búsqueda realizadas por distintas organizaciones a través de redes sociales, con fines de buscar información sobre el paradero de la propuesta beneficiaria.

## **B. Respuesta del Estado**

7. La Comisión solicitó información al Estado el 23 de agosto de 2024. A la fecha, y estando vencido el plazo otorgado, no se ha recibido su respuesta.

## **III. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD**

8. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar el cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Estas funciones generales de supervisión están previstas en el artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recogido también en el artículo 18 (b) del Estatuto de la CIDH y el mecanismo de medidas cautelares es descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas.

9. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte Interamericana” o “Corte IDH”) han sostenido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno tutelar y otro cautelar<sup>2</sup>. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos<sup>3</sup>. Para ello, se debe hacer una valoración

---

<sup>2</sup> Corte IDH, [Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II \(Cárcel de Yare\)](#), Medidas Provisionales respecto de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución del 30 de marzo de 2006, considerando 5; [Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala](#), Medidas provisionales, Resolución del 6 de julio de 2009, considerando 16.

<sup>3</sup> Corte IDH, [Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II](#), Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 8 de febrero de 2008, considerando 8; [Caso Bámaca Velásquez](#), Medidas provisionales respecto de Guatemala, Resolución del 27 de enero de 2009, considerando 45; [Asunto Fernández Ortega y otros](#), Medidas Provisionales respecto de México, Resolución del 30

del problema planteado, la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita y el grado de desprotección en que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en caso de que estas no sean adoptadas<sup>4</sup>. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo estudiada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el sistema interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inócua o desvirtuar el efecto útil (*effet utile*) de la decisión final. En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas<sup>5</sup>. Para los efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que:

- a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
- b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y
- c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

10. En el análisis de los mencionados requisitos, la Comisión reitera que los hechos que motivan una solicitud de medidas cautelares no requieren estar plenamente comprobados. La información proporcionada, a efectos de identificar una situación de gravedad y urgencia, debe ser apreciada desde un estándar *prima facie*<sup>6</sup>. La Comisión recuerda también que, por su propio mandato, no le corresponde determinar responsabilidades individuales por los hechos denunciados. Asimismo, tampoco corresponde, en el presente procedimiento, pronunciarse sobre violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana u otros instrumentos aplicables<sup>7</sup>, lo que atañe propiamente al Sistema de Peticiones y Casos. El estudio que se realiza a continuación se refiere de forma exclusiva a los requisitos del artículo 25 del Reglamento, lo que puede realizarse sin necesidad de entrar en valoraciones de fondo<sup>8</sup>.

11. De igual forma, la Comisión al momento de entender los hechos alegados por la parte solicitante previene que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a la cual el

---

de abril de 2009, considerando 5; [Asunto Milagro Sala](#), Medidas Provisionales respecto de Argentina, Resolución del 23 de noviembre de 2017, considerando 5.

<sup>4</sup> Corte IDH, [Asunto Milagro Sala](#), Medidas Provisionales respecto de Argentina, Resolución del 23 de noviembre de 2017, considerando 5; [Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II](#), Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 8 de febrero de 2008, considerando 9; [Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho](#), Medidas Provisionales respecto de Brasil, Resolución del 13 de febrero de 2017, considerando 6.

<sup>5</sup> Corte IDH, [Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II](#), Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 8 de febrero de 2008, considerando 7; [Asunto Diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia”](#), Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 25 de noviembre de 2008, considerando 23; [Asunto Luis Uzcátegui](#), Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 27 de enero de 2009, considerando 19.

<sup>6</sup> Corte IDH, [Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua](#), Ampliación de Medidas Provisionales, Resolución del 23 de agosto de 2018, considerando 13; [Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complejo do Tatuapé” de la Fundação CASA](#), Medidas Provisionales respecto de Brasil, Resolución del 4 de julio de 2006, considerando 23.

<sup>7</sup> CIDH, [Resolución 2/2015](#), Medidas Cautelares No. 455-13, Asunto Nestora Salgado con respecto a México, 28 de enero de 2015, párr. 14; [Resolución 37/2021](#), Medidas Cautelares No. 96/21, Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y familia respecto de Nicaragua, 30 de abril de 2021, párr. 33.

<sup>8</sup> Al respecto, la Corte IDH ha señalado que esta “no puede, en una medida provisional, considerar el fondo de ningún argumento pertinente que no sea de aquellos que se relacionan estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a personas”. Ver al respecto: Corte IDH, [Asunto James y otros vs. Trinidad y Tobago](#), Medidas Provisionales, Resolución del 29 de agosto de 1998, considerando 6; [Caso Familia Barrios Vs. Venezuela](#), Medidas Provisionales, Resolución del 22 de abril de 2021, considerando 2.

Estado de Venezuela se encuentra vinculado desde su ratificación el 6 de julio de 1998<sup>9</sup>, considera desaparición forzada aquella realizada “[...] por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”<sup>10</sup>. Igualmente, la Comisión Interamericana pone de relieve lo establecido por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, en el sentido de que “no existe un tiempo mínimo, por breve que sea, para considerar que se ha producido una desaparición forzada”<sup>11</sup>.

12. Al respecto, en lo que atañe al *contexto*, la Comisión viene monitoreando la situación del Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela desde el 2005<sup>12</sup>, incluyendo al país en el Capítulo IV. B de su Informe Anual. Asimismo, la Comisión ha emitido comunicados de prensa e informes de país, creando además un mecanismo especial para seguimiento de la situación de país, denominado MESEVE. También, en su Informe Anual de 2021, la Comisión señaló que en Venezuela se han practicado de forma sistemática desapariciones forzadas de carácter temporal, principalmente contra personas percibidas como opositoras<sup>13</sup>. Estas ocurren en su mayoría por la renuencia deliberada de las autoridades en informar sobre el paradero de personas detenidas, así como la falta de presentación de las personas ante tribunales dentro del plazo legal de 48 horas después de la detención<sup>14</sup>. Diversos testimonios recabados por la CIDH sugieren que las desapariciones forzadas de carácter temporal constituyen una herramienta de represión política en Venezuela<sup>15</sup>.

13. De otra parte, en su Informe Anual 2023, la Comisión advirtió la persistencia de una política articulada de represión, recomendando al Estado de Venezuela que se abstenga de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de se cumplan todas las garantías del debido proceso, incluyendo la pronta presentación ante una autoridad judicial independiente, en aras de evitar desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos<sup>16</sup>. De manera reciente, la Comisión ha condenado las prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política<sup>17</sup>. Además, la Comisión ha advertido las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas entre el 28 de julio y el 13 de agosto de 2024<sup>18</sup>. La estrategia de detención y criminalización estaría dirigida particularmente contra aquellas personas que son percibidas como opositoras al régimen, incluyendo periodistas, dirigentes de la oposición, defensores de Derechos Humanos, entre otros<sup>19</sup>. En este mismo sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH destacó que en Venezuela el derecho a la libertad de expresión sigue siendo severamente limitado. Esto como consecuencia de un contexto de intimidaciones, hostigamientos, represión y estigmatización del Gobierno hacia periodistas, personas defensoras de derechos y otras voces críticas<sup>20</sup>.

<sup>9</sup> [Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas](#), Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994, [Signatarios y estado actual de las ratificaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas](#).

<sup>10</sup> [Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas](#), Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994.

<sup>11</sup> CIDH, [Informe Anual 2021, Cap. IV.b. Venezuela](#), OEA/Ser.L/V/II, aprobado el 26 de mayo de 2022, párr. 85; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 10 de agosto de 2015, A/HRC/30/38, párr. 102.

<sup>12</sup> CIDH, [Informe Anual 2023, Cap. IV.b. Venezuela](#), OEA/Ser.L/V/II. Doc. 386 rev. 1, aprobado el 31 de diciembre de 2023, párr.1.

<sup>13</sup> CIDH, [Informe Anual 2021, Cap. IV.b. Venezuela](#), OEA/Ser.L/V/II, aprobado el 26 de mayo de 2022, párr. 82.

<sup>14</sup> *Ibidem*, párr. 82.

<sup>15</sup> CIDH, [Informe Anual 2021, Cap. IV.b. Venezuela](#), OEA/Ser.L/V/II, aprobado el 26 de mayo de 2022, párr. 84.

<sup>16</sup> CIDH, [Informe Anual 2023, Cap. IV.b. Venezuela](#), OEA/Ser.L/V/II. Doc. 386 rev. 1, aprobado el 31 de diciembre de 2023, Recomendación 8.

<sup>17</sup> CIDH, Comunicado de prensa 184/24, [CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela](#), 15 de agosto de 2024.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> CIDH, [Informe Anual 2023, Volumen II, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#), OEA/Ser.L/V/II, Doc. 386, aprobado el 6 de diciembre 2023, párr. 1620.

14. El 15 de agosto de 2024, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política<sup>21</sup>. Se consideró que el régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder, así como que Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho<sup>22</sup>. En ese contexto, la Comisión ha recibido reportes de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración en las que se habrían cometido actos de violencia sexual contra mujeres y otros actos que podrían constituir tortura, encontrando privaciones de la libertad de manera selectiva dirigida contra personas voluntarias electorales y quienes son percibidas como opositoras al régimen, incluyendo periodistas, dirigentes de la oposición, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios<sup>23</sup>. Además, se detectó el sometimiento de las personas detenidas a procesos penales por delitos redactados de forma ambigua y amplia, sin permitirles ser representadas por persona defensora de su elección, al imponerles defensores públicos. La CIDH destacó que “las prácticas de terrorismo de estado perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana”, las cuales “consolidan la denegación del derecho a la participación política”<sup>24</sup>.

15. Asimismo, el 23 de agosto de 2024, la RELE publicó un comunicado de prensa alertando a la comunidad internacional sobre la detención arbitraria de periodistas y la criminalización de la disidencia en Venezuela<sup>25</sup>. En particular sobre las detenciones, la Relatoría destacó que ha recibido informes sobre las dificultades que enfrentan los familiares de personas detenidas, como la dificultad para localizarlos, requisitos excesivos para visitas y extorsión por parte de funcionarios<sup>26</sup>.

16. La Comisión estima que las circunstancias que antecedieron la detención de la propuesta beneficiaria, sumado al monitoreo contextual del país realizado por la CIDH, revisten especial trascendencia. Lo anterior, en la medida que son consistentes con la información provista por la parte solicitante respecto a las circunstancias en que se produjo la detención y posterior falta de información acerca del de la propuesta beneficiaria.

17. Al analizar el requisito de *gravedad*, la Comisión toma en consideración, además del contexto antes mencionado, el hecho de que, desde el 22 de agosto de 2024, cuando la propuesta beneficiaria fue trasladada de la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de la Guaira por efectivos del SEBIN, su paradero es desconocido. Asimismo, al día de la fecha, no se tiene información oficial sobre su destino o su posible lugar de detención. La Comisión resalta que la propuesta beneficiaria es periodista corresponsal del diario digital “la patilla” en Venezuela y que sus familiares son dirigentes gremiales y políticos vinculados a la organización sindical “Coalición Sindical” y al Partido de Oposición COPEI. Adicionalmente, la información disponible indica que dichos familiares han sido objeto de persecución y amenazas. Al respecto, la Comisión recibió información de que el director de seguridad del Estado de Guaira habría propuesto a la madre de la propuesta beneficiaria de liberar a su hija a cambio de que se entregara.

18. Dada la situación actual de la propuesta beneficiaria, la Comisión recuerda que, conforme a estándares interamericanos, el Estado está en la obligación de mantener un registro actualizado de detenciones, proporcionar rápidamente información sobre el paradero de la persona y su estado de salud y, en caso de que la persona esté bajo la custodia del Estado, presentarla ante autoridad judicial competente dentro

<sup>21</sup> CIDH, Comunicado de Prensa 184/2024, [CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela](#), 15 de agosto de 2024.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> CIDH, [Comunicado de Prensa R190/24. La RELE alerta a la comunidad internacional sobre detención arbitraria de periodistas y criminalización de la disidencia en Venezuela](#), 23 de agosto de 2024.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

de los términos legales y respetando en todo momento las garantías judiciales<sup>27</sup>. La CIDH también destaca que toda persona detenida tiene el derecho a mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales y con otras personas<sup>28</sup>.

19. Tras requerir información al Estado, la Comisión lamenta su falta de respuesta. Aunque esto no es suficiente por sí solo para justificar el otorgamiento de una medida cautelar, impide a la Comisión conocer las observaciones o medidas adoptadas por el Estado para atender la alegada situación de riesgo en la que se hallaría la propuesta beneficiaria. Por lo tanto, la Comisión no cuenta con información que permita controvertir los hechos alegados por la parte solicitante, como tampoco valorar si la situación de riesgo en que se halla la propuesta beneficiaria ha sido atendida o atenuada. En este sentido, la Comisión expresa su especial preocupación en atención a que se ha señalado como responsables de la detención de la propuesta beneficiaria presuntamente a agentes del Estado quienes tienen una posición especial de garante de los derechos humanos. Al respecto, la Comisión reitera sus pronunciamientos sobre el actual contexto poselectoral de Venezuela, así como la falta de respuesta por parte del Estado que impide a la Comisión contar con información que permitan contrastar los alegatos expuestos por la parte solicitante. Por ejemplo, no se ha informado si la propuesta beneficiaria puede ser visitada por sus familiares o abogados de confianza.

20. La Comisión también observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor de la propuesta beneficiaria. Los familiares no tienen información oficial mínima sobre su situación jurídica, como una orden de detención o allanamiento, que les permita cuestionar las acciones adoptadas posiblemente por agentes estatales ante la autoridad competente judicial. Aunado a ello, el recurso de *habeas corpus* no fue aceptado por las autoridades competentes. En tanto se mantenga dicha situación y el Estado no brinde información precisa, la Comisión estima que la propuesta beneficiaria se encuentra en total desprotección frente a las situaciones que podría estar enfrentando en la actualidad tras desconocerse su paradero. Sumado a lo anterior, las acciones del Estado han buscado restringir las posibilidades de tomar acciones a favor de la propuesta beneficiaria mediante la persecución y amenazas a sus familiares. Al respecto, según la información disponible, terceras personas asumieron labores de búsqueda, acudiendo a la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado de la Guaira para buscar noticias del paradero de la propuesta beneficiaria. Pese a los esfuerzos, los funcionarios no brindaron ninguna información.

21. La Comisión resalta su preocupación en vista de que la situación de riesgo descrita podría tener por objeto intimidar y con ello, silenciar a la propuesta beneficiaria. De ese modo, obstaculizando el ejercicio de sus labores, incluyendo su labor periodista. Ello afecta directamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, lo cual conllevaría a su vez un efecto amedrentador para que otros periodistas y otras personas pudieran expresarse libremente en el actual contexto post electoral en el país. En particular, la Comisión destaca la situación de los familiares, quienes, siendo dirigentes sindicales y políticos, ya habrían limitado su participación sobre asuntos de interés público en el país.

22. En síntesis, la Comisión concluye que, de acuerdo con el análisis *prima facie* aplicable, está suficientemente comprobado que los derechos a la vida e integridad personal de la propuesta beneficiaria enfrentan una situación de grave riesgo, al desconocerse al día de la fecha su paradero, ubicación o destino luego de que el 22 de agosto de 2024 fuera trasladada fuera de la sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de la Guaira.

23. Respecto al requisito de *urgencia*, la Comisión considera que se encuentra cumplido, en la medida que se continúe desconociendo el paradero de la propuesta beneficiaria, y ante el transcurso del tiempo, aumenta la posibilidad de la consumación de afectaciones a sus derechos. Sumado a lo anterior, la Comisión destaca la imposibilidad de los familiares de activar acciones internas a favor de la propuesta

<sup>27</sup> CIDH, [Informe Anual 2021. Cap. IV.b. Venezuela](#), OEA/Ser.L/V/II, aprobado el 26 de mayo de 2022, párr. 86.

<sup>28</sup> CIDH, [Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas](#), adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principio XVIII.

beneficiaria a fin de dar con su paradero. De esa manera, la Comisión estima necesario la adopción de medidas para salvaguardar los derechos de la propuesta beneficiaria.

24. En cuanto al requisito de *irreparabilidad*, la Comisión sostiene que se encuentra cumplido, en la medida que la potencial afectación a los derechos a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad.

#### **IV. PERSONA BENEFICIARIA**

25. La Comisión declara persona beneficiaria de las medidas cautelares a Ana Carolina Guaita Barreto, quien se encuentra debidamente identificada en este procedimiento.

#### **V. DECISIÓN**

26. La Comisión entiende que el presente asunto reúne *prima facie* los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a Venezuela que:

a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Ana Carolina Guaita Barreto. En particular, informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención, o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino. La Comisión considera necesario que el Estado precise si la beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habersele imputado delitos. De lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha;

b) implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades periodísticas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; y

c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

27. La Comisión solicita a Venezuela que detalle, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.

28. La Comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25 (8) de su Reglamento, el otorgamiento de las presentes medidas cautelares y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

29. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva que notifique la presente resolución a Venezuela y a la parte solicitante.

30. Aprobado el 27 de agosto de 2024 por Roberta Clarke, Presidenta; Carlos Bernal Pulido, Primer Vicepresidente; José Luis Caballero Ochoa, Segundo Vicepresidente; Arif Bulkan; Andrea Pochak; Gloria Monique de Mees y Edgar Stuardo Ralón Orellana, integrantes de la CIDH.

Jorge Meza Flores  
Secretario Ejecutivo Adjunto

